

La socióloga reelecta para el cargo hasta 2028 defendió a los funcionarios públicos de las críticas y pidió que se investiguen las circunstancias que facilitaron ilícitos.

Por Felipe Cuevas Mora
 felipecuevas@diarielsur.cl

La socióloga Lorena Lobos Castro completará en 2028 diez años como presidenta regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), luego de haber sido reelecta a inicios de mes en el cargo con 613 votos de un universo de votantes de casi 4.600 funcionarios, en un proceso donde fue electa como una de las directoras nacionales de la entidad.

"Recibí esta renovación del cargo como un ejercicio de confianza de parte de los trabajadores públicos, porque pasamos un proceso electoral un poco complejo. No todos los servicios pudieron votar y que a uno lo distinguen así me hace sentir muy halagada, con una responsabilidad tremenda para dirigir esta organización en la Región", cuenta en entrevista con Diario EL SUR.

Junto a ello, reconoce que los trabajadores públicos afrontan un complejo panorama considerando el año electoral que viene con los comicios presidenciales: para las primarias, el gremio no se reunió de manera formal con ningún candidato oficialista.

"Muchas candidaturas presidenciales, particularmente de la derecha, han hecho escarnio público de la representación y el rol del Estado en nuestra sociedad, algo muy acomodaticio. Es un aprovechamiento básico de candidaturas escasas de ideas políticas y escaso reconocimiento de las necesidades de las personas", dice, para luego ahondar en que la demanda del gremio apunta a fortalecer del rol del Estado.

"Hemos comprobado que cada vez que una candidatura que ataca al Estado y dice que el privado lo hace mejor, el resultado de eso generalmente es que el privado no lo hace mejor, con un desastre igual o peor pero con un costo mucho mayor. Los trabajadores públicos tenemos la responsabilidad político-sindical de informar a nuestras bases y de que entiendan que hoy día el Estado no se puede reducir porque sí", dice.

—¿Qué evaluación realiza de la relación que han tenido con el gobierno del Presidente Boric?

—El outfit de campaña fue decir que "somos el gobierno de los trabajadores, de la gente" y eso en la práctica no ocurrió. No ocurrió no solo por la responsabilidad del propio gobierno, pero también aquí está el rol del Parlamento donde los trabajadores tuvimos dificultades porque todo lo que se discutió respecto del trabajo público no tuvo una buena acogida. Además de las dificultades que enfrentamos para levantar compromisos que se tomaron para igualar la cancha.

Ahí Lobos ejemplifica esos compromisos con la implementación de la ley de 40 horas, apelando a que "no ha habido voluntad para hacer los ajustes correspondientes, que, si ya vemos en el sector privados", y también la puesta en marcha del teletrabajo, que "no ha sido posible instalarlo con todas las condiciones que corresponde, como lo voy a apostar por una nueva forma de trabajo en el Estado en la medida de lo posible y todas las dificultades que conlleva. No tenemos esa ley, que se postergó en la última negociación".

La dirigente resume que "hay deudas importantes, con un Gobierno que está quemando sus úl-

Lorena Lobos, presidenta regional de la ANEF y el caso Licencias Médicas:

"Cuando se denosta al funcionario público, también se denosta la prestación del servicio que entrega"

Como organización estamos velando por el debido proceso, que aquí las investigaciones se hagan con respeto adecuado porque se ha ventilado los nombres de las personas involucradas".

Acá solo se culpa al funcionario público, pero hay un entorno preocupante. Hemos trabajado muchísimos años con la Suseso y Fonasa, para que haya mejoras y se fiscalicen estas situaciones, pero no hay acogida".

timos cartuchos, y no tenemos resultados. Eso nos preocupa porque hubo declaraciones de intenciones y un montón de situaciones que vemos como una deuda con que termina este periodo".

LICENCIAS MÉDICAS

Un punto donde Lorena Lobos se detiene por varios minutos es el conflicto que ha enfrentado el sector público desde fines de mayo, cuando la Contraloría General de la República reveló que 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país con licencias médicas en curso entre 2023 y 2024, de los cuales al menos mil corresponden a la Región.

La líder regional de la ANEF dice que ha habido una denostación de la función pública y pide hacer un análisis "en la justa medida", detallando que se ha conocido que un alto número de casos correspondían a licencias matemáticas: "Se presentan a 25 mil personas que defraudaron al Estado, haciendo un aprovechamiento porque son funcionarios públicos. Pero eso ocurre en la realidad privada igual, hay una proyección muchísimo mayor ahí, pero eso no se habla".

"Acá solo se culpa al funcionario público, pero hay un entorno preocupante. Hemos trabajado muchísimos años con la Suseso y Fonasa para que haya mejoras y que estos dos organismos fiscalicen estas situaciones, pero no hay acogida", lamenta.

En ese punto, afirma que está la disposición para generar cambios, pero no que "se destruya el Estado. Eso lo tiene que entender cualquier gobierno, porque somos la masa que mueve e implementa política pública, y hay una conversación que no se ha dado en ningún espacio relacionada con la distinción entre trabajadores del Estado y de Gobierno: entendemos que se debe gobernar, pero pedimos que definan su dotación, los sueldos y un montón de cosas, para no tener escenarios escandalosos donde personas con 4° medio reciben sueldos de \$4 millones, en cargos de asesores".

—¿Observa con atención el nivel de publicidad que ha tenido la difusión de este informe de la Contraloría?



En 2018, la socióloga trabajadora del Serviu Biobío fue electa como presidenta regional de la ANEF, cargo que ha revalidado en los últimos años.

"Nos falta mucho más trabajo de base"

—¿Qué tan complejo visualiza usted el panorama regional a nivel de empleo?

—Estamos muchísimo más complicados que hace algunos años respecto al empleo. Pertenecemos a la CUT, y tenemos retroalimentación con la mesa del Empleo, y preocupa que el cierre de empresas y falta de generación de empleos no sea de la preocupación de quienes pretenden llegar al Parlamento porque esto no se hace solo.

Ellos no quisieron legislar la reforma tributaria ni el impuesto a los superricos, y por ejemplo si uno ve el royalty minero favorece a las comunas más pobres del país.

Veo también que estamos pasando dificultades con el tema de la pesca y las empresas que cierran. No veo una proyección ya sea en obras públicas —que dan el tiraje a la empleabilidad— u otras que mejoren la situación.

—¿Hay un estancamiento en el desarrollo económico regional?

—Sí, y creo que va de la mano con lo vivido con la reconversión del carbón, con la diferencia que lo vamos a tener que vivenciar porque no estará escondida en Lota.

—¿Ve usted también un estancamiento a nivel de liderazgos?

—Nos falta políticamente, y me incluyo, mucho trabajo de base. Le falta empaparse de lo que la ciudadanía quiere, sus necesidades y esas cosas somos capaces de resolverlas con los jefes de servicio, y ¿qué hicieron ellos al recibirlo y luego ver redes sociales que está en Cancún? Ahí hay algo que no cuadra, y ellos tienen esa responsabilidad.

A la clase política le falta empaparse de cosas que van más en la proyección de una familia, que necesita un trabajo, e ir generando una política que le permita llegar a la vivienda, buenos colegios, un buen barrio desde la mirada que tengan buenas calles, servicios e iluminación.

—Veo a los políticos haciendo bariles, que el TikTok, que la pirta, y poca preocupación de las necesidades reales de las personas. Hay honrosas excepciones en el trabajo con las juntas de vecinos y los propios vecinos. A nosotros nos gustaría también llegar al socio de base.

—Ha sido una situación muy trabajada desde el marketing para destruir a la función pública, y ha logrado su objetivo. Hay gente que ha salido muy dañada, sobre la palestra con una plena presunción de inocencia.

Hay casos que son desgarradores que hemos tenido que ver y tendremos que salir a defender porque hay salidas justificadas. O hay licencias por enfermedades mentales, donde los informes médicos les ordenaban salir y distraerse, porque hay licencias que funcionan así. Esas personas están en la misma condición que quienes presuntamente cometieron un delito y aquí están pagando justos por pecadores.

La dirigente cuenta que "como organización estamos velando por el debido proceso, que aquí las investigaciones se hagan con respeto adecuado porque se ha ventilado los nombres de las personas involucradas, las señalan en su trabajo y lo están pasando mal. Además, a estos funcionarios públicos ya se les hizo un juicio público, ya se les culpó sin la presunción de inocencia y me parece gravísimo que nos ocurra como sociedad", y pide que en estos casos

—donde los sumarios están próximos a finalizar— exista el mayor cuidado, porque "hay familias detrás y personas cuestionadas sin haber cometido un delito".

—¿Qué grado de responsabilidad tienen ustedes como funcionarios públicos detrás de estas irregularidades?

—El trabajador público y privado que hace abuso de un derecho social, de resguardar la salud con reposo, y utiliza un instrumento que no corresponde para hacer uso de vacaciones, evidentemente tiene un grado de responsabilidad importante.

Pero aquí es como cuando atacamos a la persona que se droga, y no a los carteles del narcotráfico: atacamos al que cometió el error, pero no a los médicos que entregan estas licencias y que forman parte de un mercado que es real, que está en Internet. Eso no se lo he escuchado decir a nadie, ¿tendrán alguna pena, alguna sanción, o al menos serán investigados? ¿O ellos son los intocables?

Sivamos a hablar de responsabilidades, que caigan todos y hagamos las cosas bien. Si no se persiguen las responsabilidades en este

otro ámbito, como organización tomaremos la bandera para ver que sucede acá. Al ministro le hemos planteado que debe haber un mecanismo de fiscalización y responsabilidad detrás de lo que se recibe, porque acá como empleador si recibes una licencia médica, el primero en revisarla es el empleador aquí es el Estado, subsidiariamente los jefes de servicio, y ¿qué hicieron ellos al recibirla y luego ver redes sociales que está en Cancún? Ahí hay algo que no cuadra, y ellos tienen esa responsabilidad.

En el cierre, Lorena Lobos dice que tras las elecciones de noviembre no habrá mayores cambios al sistema, apelando a que "este es un país que olvida rápido, de memoria corta y esta es la política fácil. Pasó con Penta, con SQM y terminé todo con clases de ética".

"Invito a las personas a reflexionar, porque finalmente el Estado lo construimos todos. Cuando se denosta al funcionario público, también estoy denostando la prestación del servicio que me entrega, que es bastante óptimo para los recursos que tenemos. El pido a la gente que se informe y que no se deje llevar del marquetado sucio", defiende la dirigente.